

INFORME SECRETARIAL: Santa Marta, Tres (3) de febrero de 2022

Al Despacho el expediente para informar que el apoderado de la demandada interpuso recurso de reposición contra el mandamiento de pago.

Que a la fecha se encuentra vencido el traslado.

DIANA MARGARITA MENDOZA FUENTES
SECRETARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO
SANTA MARTA - MAGDALENA

**REF.: PROCESO EJECUTIVO A CONTINUACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO
SEGUIDO POR NUBIA OSPINO OLIVEROS CONTRA COLPENSIONES.
RAD.2018/120**

Santa Marta, Tres (3) de febrero de 2022

I. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

El apoderado judicial de la parte demandada presenta recurso de reposición contra el auto de fecha 4 de noviembre de 2021 a través del cual se libró mandamiento de pago a su cargo.

I. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

Fundamenta la ejecutada su recuso bajo los siguientes parámetros “La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al tener el Carácter de entidad pública, goza de los privilegios y prerrogativas que las leyes le confieren, particularmente el artículo 87 de la Ley 489 de 1998, el 192 del CPACA, el 307 del Código General del Proceso y el 98 de la Ley 2008 de 2019, en el entendido que cuando sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración”.

• II. DEL TRASLADO DEL RECURSO.

El apoderado de la parte demandante no recorrió el traslado.

III. CONSIDERACIONES

I. Oportunidad y trámite del Recurso de Reposición:

El artículo 63° C.P.L. y por analogía el 349 del y C.P.C. regulan en cuanto a la oportunidad y trámite del recurso determinan:

*"El recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios interpondrá dentro de los **dos días siguientes a su notificación** cuando se hiciere por estados, u se decidirá a más tardar tres días después. Si se interpusiere en audiencia, deberá decidirse oralmente en la misma, para lo cual podrá el juez decretar un receso de media hora.*

"Si el recurso se formula por escrito, este se mantendrá en la secretaría por dos días en traslado a la parte contraria, sin necesidad de que el juez, lo ordene; surtido el traslado se decidirá el recurso."

En consideración a lo normado se observa que el recurso fue interpuesto dentro del término legal ya que la publicación del auto fue de fecha 5 de noviembre, ordenándose en dicho auto la notificación por estado del mandamiento ejecutivo, lo que quiere decir que el termino para interponer el recurso de reposición era hasta el 9 de noviembre de 2021, fecha dentro de la cual efectivamente el ejecutado presentó su recurso. Así las cosas, el recurso impetrado fue interpuesto dentro de la oportunidad procesal.

Las normas enfrentadas son:

ART 307 CGP Ejecución contra entidades de derecho público. Cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración.	Artículo 98 de la Ley 2008 de 2019: dispone: "...La Nación, las entidades territoriales o cualquier entidad del orden central o descentralizada por servicios condenadas judicialmente al pago de sumas de dinero consecuencia del reconocimiento de una prestación del Sistema de Seguridad Social Integral, pagarán dichas sumas con cargo a los recursos de la seguridad social en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el artículo 307 de la Ley 1564 de 2012.
---	---

Como primera medida, es importante señalar que, el artículo 4° de la Constitución Política establece que, cuando existen normas contrarias a la Constitución, se aplicarán las medidas contenidas en la Carta Política debido a su superioridad jerárquica.¹ Lo anterior fundamenta el objeto de la figura conocida como *excepción de inconstitucionalidad*.

En sentencia SU-132 de 2013 la Corte Constitucional señaló que la jurisprudencia constitucional ha definido que *“la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales”*.² En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto *inter partes*, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política.

Expone la sentencia SU132 DE 2013, en lo referente a la excepción de inconstitucionalidad:

Adicionalmente a lo expuesto, la jurisprudencia ha establecido que, cuando el funcionario inaplica la excepción solicitada por las partes, siendo procedente, genera específicamente, un defecto sustantivo por inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Éste defecto se presenta cuando “la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (b) es inconstitucional, (c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso. También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave error en la interpretación de la norma constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución.

*Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente; o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.”*³ (Negrilla fuera del texto).

Frente al tema del pago oportuno de mesadas pensionales es doctrina probable en materia constitucional que la *cesación prolongada en el pago de la mesada pensional, es decir, aquella que se extiende por más de dos periodos, permite presumir la vulneración del mínimo vital del pensionado y su grupo familiar*, sentencias T-246 de 1996, T-011 de 1998, T-544 de 1998, T-025 de 2000, SU-090 de 2000, T-908 de 2002, T-814 de 2004, T-

133 de 2005, T-1129 de 2005, T-567 de 2005, T-241 de 2007 y T-460 de 2007.

Palmariamente se aprecia que el término de 10 meses excede el de dos períodos de Pago pensionales, de tal forma que de aplicarse irreflexiblemente la norma en que se apoya la recurrente, habría que dejar al pensionado sin mesada y sin el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva por 10 meses, por cuanto no podría iniciar proceso ejecutivo, obligando al juez a NO actuar a sabiendas que existe la presumible afectación del mínimo vital del pensionado y núcleo familiar -a menos que el fondo de pensiones logre demostrar al momento de la notificación del mandamiento de pago, que el pensionado goza de una estabilidad económica tal que le permita esperar los 10 meses puesto que la presunción de afectación al mínimo vital se puede desvirtuada-. Desde luego que el juez ordinario investido también como juez constitucional no podría avalar una actuación procesal atentatoria de los derechos fundamentales de una de las partes.

Ahora bien, al analizar la finalidad perseguida por el artículo 98 de la Ley 2008 de 2019 que no es otro que el de permitir que la entidad pública pueda arbitrar los recursos para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a las regulaciones que rigen el proceso presupuestal, lo cual podría considerarse un fin legítimo, pero no hay que perder de vista que tratándose obligaciones pensionales dichos fines deben ceder a la protección de derechos de personas que se encuentran en la etapa de la vida que requieren mayor protección del Estado. En efecto, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en materia pensional no solo apareja el cumplimiento de la sentencia en términos económico sino el acceso a la salud como derecho Fundamental como lo ha entendido igualmente la Corte Constitucional en sentencia T-756 de 2009: *"ha de tenerse en cuenta que el reconocimiento de la condición de pensionada de la accionante trae consigo la obligación de la entidad demandada de brindar oportunamente el servicio de salud, máxime tratándose de un adulto mayor en quien concurre además una situación de invalidez, lo cual hace necesaria una protección preferente y especial, pues su estado le apareja una manifiesta condición de indefensión y limitación, no debiendo entonces la administración, exigirle la realización de trámites dispendiosos para empezar a gozar del servicio público de salud"*.

Así las cosas, el término de 10 meses que debe esperar el beneficiario de una sentencia judicial, por razones presupuestales, devendría en un término irrazonable cuando se trata de una persona pensionada pues tendría también el mismo término para acceder al goce de su derecho a la salud que es de estirpe constitucional y no puede estar sometido a ninguna condición.

En consecuencia, la aplicación del artículo 98 de la ley 2008 de 2019 en el caso concreto, se torna inconstitucional por cuanto dada la condición de pensionado de que goza el accionante, limitar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva hasta luego de que trascurra 10 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, atenta contra sus derechos

fundamentales al mínimo vital y salud, aclarando que el ente ejecutado no demostró que el accionante se encontraba en condiciones económicas que le permitieran esperar los diez meses.

En razón a todo lo expuesto antes, este agente judicial, no repone el auto del 4 de noviembre de 2021, a través del cual se libró orden de pago a favor de la señora **NUBIA OSPINO**.

Del recurso de apelación.

El artículo 65 del C.P.L. Y SS en su numeral 8 del establece:

Artículo 65. Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

8. El que decida sobre el mandamiento de pago.

El recurso de apelación se interpondrá:

1....

2. Por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes cuando la providencia se notifique por estado. El juez resolverá dentro de los dos (2) días siguientes.

La ejecutada mediante escrito interpuso recurso de apelación contra el auto de fecha 4 de noviembre de 2021, mediante el cual este despacho libro orden de pago.

En atención a que el apelante presentó su recurso dentro del término legal y que el auto apelado se encuentra dentro de los autos susceptibles de apelación, en virtud a ello este Despacho concede el recurso de APELACIÓN presentado por el apoderado de COLPENSIONES, contra la providencia fechada el 4 de noviembre de 2021, auto mediante el cual se LIBRO ORDEN DE PAGO. En consecuencia, envíese el expediente digital al H. Tribunal Superior de Santa Marta –Sala Laboral- para lo de su cargo (Art.65 C.P.L.). A través de la secretaría del despacho realícese el reparto correspondiente del proceso y el envío del mismo.

En consideración a lo anterior el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta;

RESUELVE

PRIMERO: NO Reponer el auto de fecha 4 de noviembre de 2021, de conformidad con lo expuesto antes.

SEGUNDO: Por secretaria realícese el trámite correspondiente del reparto del proceso al Magistrado de turno y envío del expediente digital a la Secretaria de la Sala Laboral del H. Tribunal del Distrito Judicial de Santa Marta para lo de su cargo.

MARIA ISABEL CIFUENTES SIERRA

Jueza

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO.

Santa Marta. – En la fecha 4 de febrero de 2022, se notifica el auto precedente por ESTADOS N° **05**, fijados a las 08:00 a.m.

Secretario (a)

Firmado Por:

Maria Isabel Cifuentes Sierra

Juez
Juzgado De Circuito
Laboral 001
Santa Marta - Magdalena

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9da48158e019be4a2b58eeae94d0c07e0300c50394536d7325462d131db0b0f1**

Documento generado en 03/02/2022 11:54:09 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>